



Editorial

El desafío real tras el fin del CAE

Rectores liderados por Juan Yuz advierten que el proyecto FES, sin ajustes, podría afectar sostenibilidad de las universidades.

El fin del Crédito con Aval del Estado (CAE) es una deuda pendiente del sistema político chileno, y que por fin comienza a discutirse con seriedad en el Congreso a través del proyecto de ley de Financiamiento de la Educación Superior (FES). Sin embargo, poner fin al CAE no puede ser simplemente una operación simbólica. Debe ser una reforma estructural, técnica y sostenible, que no dañe la calidad ni la viabilidad de nuestras universidades. En ese punto, las advertencias del Consejo de Rectores (CRUCH), y en particular del G9 y el CUECh, no pueden ser ignoradas.

El rector Juan Yuz, de la Universidad Técnica Federico Santa María y actual presidente del G9, lo deja claro: todos los rectores comparten la necesidad de superar el CAE, pero el instrumento que lo reemplazará aún requiere modificaciones. No se trata de un rechazo político, sino de una demanda técnica y responsable. Flexibilizar el nuevo instrumento, ampliar el copago y evaluar el impacto financiero real en cada institución no son caprichos, sino condiciones mínimas para evitar que el remedio termine siendo peor que la enfermedad.

El Estado debe hacerse cargo de la desigualdad en el acceso a la educación, pero también tiene el deber de garantizar que las universidades -estatales y tradicionales privadas- puedan sostener su funcionamiento, sus programas de calidad y su aporte público. Ignorar eso sería hipotecar el sistema completo.

Yuz plantea además un punto crucial: no todas las universidades enfrentan la misma realidad socioeconómica ni reciben los mismos aportes. Por eso es tan relevante que la Subsecretaría de Educación Superior escuche activamente a las casas de estudio y ajuste sus cálculos. No hacerlo sería condenar a instituciones como la Universidad de Playa Ancha, que ya enfrenta dificultades financieras, a una crisis mayor.

Reformar el financiamiento estudiantil no puede hacerse con eslóganes. Se requiere una política de Estado con responsabilidad intergeneracional. Que se acabe el CAE, sí, pero no a costa de quebrar universidades o cargar todo el peso en los hombros del Fisco. Se trata de construir un sistema justo, pero también viable. Y para eso hay que escuchar a quienes conocen desde dentro el corazón de la educación superior chilena.